

Dolorosa verdad: Para que no se repita

La Revista Agraria

El impacto del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en el Per entero, ha sido terrible. Las reacciones suscitadas constituyen una radiografía de las actitudes políticas y visiones que tienen del país los diferentes sectores sociales, los dirigentes políticos, las fuerzas armadas y policiales, los familiares de las víctimas.



Habíamos aceptado, basados en noticias periodísticas e informes de diversos organismos, como si fuera definitiva, la cifra de 30,000 muertos en veinte años de violencia política, entre 1980 y el 2000. Pero ahora, culminado su trabajo, las proyecciones de la CVR ms que duplican esa cantidad, hasta alcanzar 69 mil muertos y desaparecidos. Permanecen, pues, ausentes en los cálculos hasta ayer efectuados, miles de campesinos arrasados por la maquinaria de la muerte constituida por **Sendero Luminoso** y la ciega respuesta de soldados, policías e, incluso, ronderos.

Si de por s esta cantidad de muertos es terrible, tampoco deja de serlo que en el Per puedan morir o desaparecer miles de ciudadanos sin que se entere el resto de la sociedad, sin que reclamen nuestros dirigentes, sin que las instituciones del Estado reaccionen. Es que los muertos ignorados procedan de la población excluida de los "planes de desarrollo", es decir, de una población política y socialmente invisible.

Una muestra de este olvido colectivo se encuentra quizá en otro dato terrible: del total de 69 mil muertos, el 75%, es decir tres de cada cuatro víctimas, fueron campesinos o campesinas quechua-hablantes, la mayora de Ayacucho. Un país con profundas brechas sociales y culturales como el nuestro refleja, con esas víctimas, el desprecio a la vida de campesinos que conforman el sector ms marginado, pobre y excluido desde siempre en la historia republicana del país. A los actores en armas jamás les interés respetar la vida de estos "condenados de la tierra".



El principal responsable de los asesinatos fue Sendero Luminoso (SL), partido político terrorista que considera a los campesinos como "masa" -es decir, carne de can- para su propuesta de un "nuevo Estado". Cuando SL puso en marcha la maquinaria de la muerte, no exista ya en el Per el régimen tradicional terrateniente; entonces convirtió en "gamonales explotadores" a los comuneros que posean ms ganado, a las autoridades locales elegidas y legitimadas, a los dirigentes de organizaciones, convencido de que con estos asesinatos lograba "destruir el viejo orden". Mas la expansión del senderismo fue posible no solo por el camino del terror; el apoyo, sobre todo en los primeros años de violencia, de sectores rurales a los grupos subversivos, también fue una realidad. Como explicar esto?

La ausencia del Estado es una primera explicación. Al destruirse el orden gamonal, y su poder en los espacios locales, el "vaco" generado facilita la expansión del discurso subversivo con una idea central: hacer justicia. Justicia a través de la salud, del reconocimiento de las diferencias culturales, de los caminos y carreteras por construir, del mejor ingreso por lograr. Es decir, a través de la superación de la discriminación cultural, social y económica, sobre la cual se habla mucho pero se hace muy poco. Como dicen algunos, el proceso de modernización no solo haba quedado inconcluso en muchas partes del país, sino que en otras simplemente nunca llegó.

Por el contrario, las fuerzas del orden arremetieron con violencia contra los poblados rurales porque su desconocimiento acerca de estos fue de tal envergadura, que convirtió en sospechosos de "terrucos" a amplios grupos de la población, especialmente rural. Por ello, detrás de muchas masacres colectivas -que algunos llaman "excesos"- está el profundo abismo que separa a nuestras fuerzas armadas de los ciudadanos diferentes, de los ciudadanos de segunda del país.

El período de violencia nos muestra además, con crudeza, otra característica saltante de nuestra sociedad rural: los múltiples conflictos que la definen, y de los cuales aprovechó SL para expandirse. Empero, esta conflictividad local respetaba la vida y no se zanjaba con la muerte, todo lo contrario a la actitud de SL cuando asume el "ejercicio" de la justicia y pretende solucionar los conflictos locales. Desde entonces, puso en su contra a quienes le habían mostrado simpatía inicial, pues la muerte, el "ajusticiamiento", no forman parte de las respuestas culturales. También el MRTA pretendió actuar a nombre de la justicia para los excluidos, contribuyendo a alimentar la violencia aún ms.

El informe de la CVR revela crudamente otra de nuestras características: las diferencias regionales. Los espacios regionales fueron escenarios diferenciados en el ciclo de la violencia, por sus particularidades sociales, culturales e incluso geográficas. Mientras que en Ayacucho -el principal cementerio clandestino del país entre 1983 y 1985- la marginación y exclusión son razones principales, en el Huallaga, la producción de coca marca el pico de mayor violencia entre 1989 y 1992. En el sur andino, la lucha por la tierra permitió la formación de un frente de campesinos, partidos políticos, ms la Iglesia, que logró frenar el avance senderista. En el nororiente, los reclamos de arroceros y maiceros fueron instrumentalizados por el MRTA, mientras que en la sierra central y la sierra nortea los senderistas destruyeron las SAIS, criticadas por las comunidades socias vecinas.

Asimismo, cuando la DINCOTE captura en 1992 a Guzmán en Lima -de donde nunca se había movido a lo largo del período de violencia-, las ciudades eran el blanco

predilecto de los atentados y acciones terroristas. Derrotado por los mismos campesinos y los militares en el campo, Guzmán había concentrado sus acciones en la mayor "caja de resonancia", para multiplicar su impacto. Así, el centralismo también condicionó a las organizaciones subversivas, cuyas jefaturas estaban instaladas en la capital y no en los escenarios de violencia.

Justicia, regiones, centralismo, exclusión, modernización... Podremos elaborar un amplio glosario capaz de reunir las explicaciones de la violencia política y de los 69 mil muertos que esta causa. Podemos ahora conocer en detalle las diferentes formas de la vesania y el atropello a través de cualquiera de los 16,986 testimonios que ha recogido la CVR. Pero, al final de cuentas, nos queda la misma impresión: 69 mil muertos no han modificado las causas de la violencia.

Obviamente, su causa principal fue la decisión de SL de iniciar una guerra contra el Estado peruano, pero será absurdo desconocer que su rápida expansión en la región de Ayacucho y su posterior crecimiento a casi toda la sierra del país, aprovechó aquellos grandes vacos que limitan a nuestra democracia. Estos vacos perduran y basta revisar los planes de inversión o los planes de desarrollo o el presupuesto estatal para constatar, en una ecuación dolorosa, que allí donde más muertos hubo, se dispone de menor inversión, menos apoyo, menos desarrollo. En estos espacios rurales se reparten alimentos; no se impulsa el desarrollo.

El gaseoducto que desde la selva de Camisea, cruzando el río Apurmac, sube por el territorio de las comunidades masacradas por SL y pasa al lado de centenares de fosas comunes en Chungui, para seguir su recorrido por las alturas, en el territorio de otras comunidades masacradas por el ejército, y luego culminar su trayecto en la apacible bahía de Paracas, no modifica en absoluto la situación de los campesinos y de la región. Por supuesto que es importante su ejecución, pero no podemos concebir el futuro del país como el de un territorio donde existan tres o cuatro gaseoductos, o varias grandes empresas mineras o petroleras, mientras que la situación de la población rural continúa siendo la misma. Debemos construir una visión compartida del país, y a ello debe contribuir nuestra clase política, responsable, como dice la CVR, de indiferencia, pasividad o simple ineptitud en el período de violencia política.

Los muertos no deben ser olvidados. Deben recordarnos, cotidianamente, que en aquella visión compartida de país, como integrantes de la sociedad civil, nuestra obligación es contribuir a la construcción de una democracia realmente inclusiva, donde las diferencias sean reconocidas y aceptadas.

La Revista Agraria, año 3, no. 47. CEPES, Centro Peruano de Estudios Sociales, Lima, Perú: Perú. Agosto. 2003

Acceso al texto completo: <http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra47/coyu-01b.htm>